

RESULTANDO:

“IV.- ACTO RECLAMADO: - - - • La sentencia condenatoria para con mis representadas, de fecha 25 de abril del 2022, dictado dentro del juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje 208/2020, del índice del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, notificado el 26 de abril de 2022, de forma personal



por comparecencia.”.

A continuación expusieron los que consideraron constituían los antecedentes del acto reclamado, los cuales no se reproducen por ser innecesario, pero se atiende a su contenido.

SEGUNDO. Conocimiento y admisión. La demanda se radicó ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en esta Ciudad, bajo el expediente *********, y se admitió a trámite mediante proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós.

CUARTO. Sentencia. Seguido el procedimiento por sus trámites, en audiencia constitucional de veinticinco de julio de dos mil veintidós, firmada el veinticuatro de octubre del mismo año, se dictó sentencia, en la que se resolvió, lo siguiente:

“ÚNICO.-La Justicia de la Unión No ampara ni protege a *****

******* ***** ** ***** *****; *******

******* ***** **; ***** *******

******* **; y ***** ***** **;**

contra actos del Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en los términos del último considerando de este fallo. - - - Notifíquese [...].”.

CUARTO. Recurso de revisión. Inconformes con

PRIMERO. Competencia. Este Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito es



SEGUNDO. Oportunidad del recurso. El recurso

TERCERO. Sentencia impugnada. La resolución

recurrida se apoyó en las siguientes consideraciones:

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.5
26/05/24 17:00:00

***** ** ***** ***** *****

*****y*****

expediente *** del índice de la autoridad responsable, que remitió en apoyo a su informe justificado. - - - Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 278, visible a foja 231, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, bajo el rubro y literal siguiente: - - - 'INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.'. (Se transcribe texto). - - - También es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Máximo Tribunal del país, publicada en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, bajo el rubro y tenor literal siguiente: - - - 'DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.'. (Se transcribe texto). - - - TERCERO. Al no advertirse de oficio que se actualice alguna causal de improcedencia o que las hubieran hecho valer las partes, procede entrar al estudio de la cuestión planteada en el presente juicio, a la luz de los conceptos de violación que señala la quejosa en su escrito de demanda, los cuales no se transcriben por no ser necesarios para el desarrollo y dictado de la presente resolución; además, de que dicha**



puesto que no analiza la procedencia de la acción y las defensas y/o excepciones hechas valer en el

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.b7
26/05/24 17:00:00



derecho en cuanto a las acciones y excepciones que
hayan motivado la litis contestatio. Este

finalidad es resolver una cuestión litigiosa de carácter principal entre dos o más sujetos de comercio, en el cual se ejercen acciones y se oponen defensas y excepciones ante el tribunal arbitral, que es resuelto en definitiva por un laudo definitivo, lo cual se equipara a un procedimiento seguido en forma de juicio. - - - En esas condiciones, si el laudo arbitral constituye la culminación de un procedimiento seguido en forma de juicio ante un ‘tribunal arbitral’, la resolución dictada en el procedimiento judicial en el que se solicita su nulidad y la acción reconvencional, en la cual se exige la ejecución del laudo, deben considerarse actos ejecutados fuera de juicio. - - - Bajo esa óptica, la sentencia dictada en un procedimiento de nulidad del laudo arbitral si bien se realiza ante autoridad jurisdiccional, dada su naturaleza y finalidad no resuelve en el fondo el conflicto de intereses original –litis arbitral-, porque dicha acción no se instaura en el ejercicio de una acción personal, real ni del estado civil, pues su objeto —nulificar un laudo— no es, ni equivale a hacer efectivo un derecho personal, ni uno real, ni está referido al estatuto civil de la persona física. - - - En ese orden, la sentencia con la que culmina dicho procedimiento no puede



sentencia emitida en el procedimiento de nulidad, no puede considerarse como definitiva para los efectos

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.b7
26/05/24 17:00:00

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.b7
26/05/24 17:00:00



homologación. Salvo cuando se solicite el reconocimiento y ejecución como defensa en un juicio u otro procedimiento, el reconocimiento y ejecución se promoverán en el juicio especial a que se refieren los artículos 1472 a 1476.'. - - - 'Artículo 1472. El juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje, a que se refieren los artículos 1470 y 1471, se tramitará conforme a los siguientes artículos.'. - - - 'Artículo 1473. Admitida la demanda, el juez ordenará emplazar a las demandadas, otorgándoles un término de quince días para contestar.'. - - - 'Artículo 1474. Transcurrido el término para contestar la demanda, sin necesidad de acuse de rebeldía, si las partes no promovieren pruebas ni el juez las estimare necesarias, se citará, para dentro de los tres días siguientes, a la audiencia de alegatos, la que se verificará concurran o no las partes.'. - - - 'Artículo 1475. Si se promoviere prueba o el juez la estimare necesaria previo a la celebración de la audiencia, se abrirá una dilación probatoria de diez días.'. - - - 'Artículo 1476. Celebrada la audiencia el juez citará a las partes para oír sentencia. Las resoluciones intermedias dictadas en este juicio especial y la sentencia que lo resuelva no serán recurribles.'. - - - 'Artículo 1477. Los juicios especiales que versen sobre nulidad o reconocimiento y ejecución de laudos comerciales

podrán acumularse. Para que proceda la acumulación, es necesario que no se haya celebrado la audiencia de alegatos. La acumulación se hará en favor del juez que haya prevenido. La acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en jurisdicciones territoriales diversas o en el extranjero, ni entre tribunales federales y los de los estados. La acumulación se tramitará conforme a los artículos 73 a 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles. La resolución que resuelva sobre la acumulación es irrecurrible.’ - - - ‘Artículo 1478. El juez gozará de plena discreción en la adopción de las medidas cautelares provisionales a que se refiere el artículo 1425.’. - - - **De los preceptos legales citados, se advierte lo siguiente: - - - 1. La materia sustantiva de impugnación sigue siendo la misma, únicamente puede solicitarse la nulidad del laudo arbitral por vicios de forma, cuyos supuestos taxativos se encuentran previstos en el artículo 1457 del Código de Comercio, por tanto no permite a la autoridad judicial el análisis de cuestiones de fondo. - - - 2. La tramitación del procedimiento judicial de nulidad de laudo arbitral dejó de substanciarse en la vía incidental (en términos del artículo 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles), para ahora sustanciarse en la vía de juicio especial denominado**

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.b7
26/05/24 17:00:00

***** ***** ***** ***** ********** ** *****

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.b
26/05/24 17:00:00

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.b
26/05/24 17:00:00

******* ***** *****, en su carácter de representante**

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.5
26/05/24 17:00:00



A).- La declaración de su Señoría de que el Laudo Final de fecha 20 de febrero de 2020 relativo al arbitraje **** número No. ***** del Centro Internacional para la Resolución de Disputas (CIRD) de la Asociación Americana de Arbitraje (AAA), es válido, eficaz, reconocible y ejecutable. - - - B).- Como consecuencia de lo anterior, condenar a todos los LITISCONSORTES ACTIVOS EN LO PRINCIPAL y LITISCONSORTES PASIVOS RECONVENIDOS, al cumplimiento forzoso de todos y cada uno de los resolutivos del laudo final de fecha 20 de febrero de 2020 relativo al arbitraje **** número No. ***** del Centro Internacional para la Resolución de Disputas (CIRD) de la Asociación Americana de Arbitraje (AAA), ordenando en ejecución de sentencia lo conducente a los resolutivos DÉCIMO SEGUNDO y DÉCIMO TERCERO. - - - [Transcribe los puntos resolutivos] - - - C).- Como consecuencia de lo anterior, condenar a todos los LITISCONSORTES

veintiuno. *****

de su apoderado *** , en su**

carácter de apoderado de la codemandada ****

***** ***** ***** ***** ***** , *dio*

contestación a la demanda entablada en su contra,

C).- Como consecuencia de lo anterior, condenar a todos los LITISCONSORTES ACTIVOS EN LO PRINCIPAL y LITISCONSORTES PASIVOS RECONVENIDOS, al pago de costas, gastos y honorarios de abogados, liquidables en ejecución de sentencia. - - - [...].'. - - -

***** ***** *****, en su carácter de representante

Seguida la secuela procesal, el veinticinco de abril de dos mil veintidós, el juez natural dictó sentencia, la cual concluyó con los resolutivos siguientes: - - -

'A).- PRIMERO. Ha sido procedente la vía especial sobre

Magna, además de los principios de exhaustividad y



congruencia, previstos en el artículo 1077 del Código de Comercio, así como los diversos artículos 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida por el ‘Pacto de San José’, pues considera que el juez responsable omitió fundar y motivar la resolución que constituye el acto reclamado, ya que fue omiso en no hacer un estudio íntegro de los puntos debatidos por las partes, básicamente por lo siguiente: - - - a) Que en el laudo arbitral así como la sentencia reclamada no se tomó en cuenta la génesis del contrato de donde emana la cláusula arbitral, pues si la vía o la génesis es mercantil, se traduce a una violación indirecta del orden público, al someter al arbitraje un contrato que por su naturaleza es administrativa, por así determinarlo el nacimiento de su obligación, ya que la tercera interesada *** ***

******* , no tenía las facultades ni permisos para celebrar fideicomisos, precisamente por su naturaleza administrativa, pues al realizar el inicio de procedimiento de contratación de acuerdo con la resolución número ***** , emitida en la sesión ordinaria ***** , de fecha catorce de octubre de dos mil catorce, dicho procedimiento comenzó antes de que la Ley de Petróleos Mexicanos de 2014**

***** , y por ende al tener el carácter de una entidad paraestatal, el contrato debió ser administrativo y no mercantil, de ahí que la ley aplicable para celebración y ejecución de los contratos (fideicomisos) era la de 2008 administrativo hasta su ejecución. - - - b) Que es ilegal la resolución reclamada, dado que la tercera interesada ***** * ***** como entidad paraestatal de la Administración Pública Federal, regulado por la Ley de Petróleos Mexicanos de 2008, legislación vigente en que inicio la subasta, a saber, el quince de octubre de dos mil catorce, no respetó los fundamentos que sirvieron de base para el procedimiento de contratación por medio de subasta, en virtud de que aplicó otras leyes durante dicho procedimiento (Ley de Petróleos Mexicanos de 2014 que entró en vigor hasta el quince de abril de dos mil quince), por lo que rebasó los límites de su esfera jurídica al aplicar leyes que aún no estaban en



*vigor, violentándose el orden público desde el procedimiento de contratación, por ende los fideicomisos son nulos de pleno derecho. - - - c) Que el juez responsable no respetó el principio de igualdad procesal, en razón de que las actoras en la reconvención ******

****** ** ***** ***** ***** , y
***** ***** * ***** , fueron omisas en*

exhibir el acuerdo de arbitral en original o en copia certificada con su debida traducción al español como lo establece el artículo 1461 del Código de Comercio, lo que constituye un requisito formal para acreditar la acción reconvencional consistente en el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral de veinte de febrero de dos mil veinte, por lo que no debió proceder tal acción, de ahí la ilegalidad del acto que se reclama. - - - d) Que el juez responsable omitió motivar y fundamentar el acto reclamado, al tener por admitidas las demandas en reconvención de los terceros interesados, cuando no reunían los requisitos estipulados en el artículo 1378 del Código de Comercio, pues no contenían el capítulo de ‘pruebas’ en el que exhibieran y ofrecieran tales medios de convicción que se relacionen con los hechos en dichos ocursos, que en lugar de

ambos de veintisiete de noviembre de dos mil catorce, con los que las quejas firmaron los contratos mercantiles EPC de diez de diciembre de dos mil catorce, por lo que no podían contratar por medio de subasta restringida a bancos privados, ni celebrar fideicomisos privados, ni mucho menos celebrar dichos contratos, porque todavía no entraba en vigor la nueva Ley de Petróleos Mexicanos de

paraestatales, por ende son de naturaleza administrativa y no mercantil, pues dichos contratos tenían como objeto la construcción de equipos modulares de perforación marinos para operar en plataformas fijas de producción en el Golfo de México, es decir, la finalidad para la cual estaban destinados dichos equipos es para extracción de hidrocarburos (petróleo), actividades propias del Estado, pues son actos de carácter administrativo, aunado al hecho que el tribunal arbitral no tenía jurisdicción para pronunciarse respecto a la controversia planteada. - - - Ahora bien, los anteriores conceptos de violación, por la relación que guardan entre sí, se analizarán de manera conjunta, tomando en consideración que, de acuerdo a criterios reiterados por el Máximo Tribunal de la Nación, la demanda de amparo representa un todo y debe analizarse en su integridad, esto es, en cada uno de los capítulos que la componen, a fin de establecer los argumentos propuestos por el quejoso en contra de los actos reclamados aunque no se encuentren especificados en el título de conceptos de violación. - - - Ello implica, que el Juez de amparo puede analizar, de manera global, las cuestiones aducidas en la demanda de garantías y



de su exposición o en uno diverso, por lo cual, no

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.5
26/05/24 17:00:00

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.b7
26/05/24 17:00:00

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.b7
26/05/24 17:00:00

específico que debe respetar las formalidades



esenciales del procedimiento, atribuyendo a un tercero la facultad de resolver el litigio existente mediante un laudo, que tendrá fuerza vinculatoria para ambas partes como si lo hubiera resuelto un Juez del Estado. - - - El arbitraje es de naturaleza convencional, ya que se basa en la autonomía de la voluntad de las partes, con sustento en la libertad contractual, a través del cual otorgan facultades a un tercero (árbitro) para resolver una controversia que puede ser sustraída del ámbito jurisdiccional estatal.

- - - Una vez dictado un laudo arbitral puede ser objeto de estudio por la autoridad judicial cuando se promuevan los procedimientos de nulidad regulados en los artículos 1457 a 1459 del Código de Comercio; y, de reconocimiento y ejecución previsto en los numerales 1461 a 1463 del mencionado ordenamiento. - - - En cuanto al reconocimiento y ejecución, éste deberá tramitarse como un juicio especial, en el cual deberán respetarse las formalidades esenciales del procedimiento, que culminará con una resolución a través de la cual el órgano jurisdiccional sólo podrá denegar el reconocimiento o ejecución, cuando concurren los supuestos establecidos en el numeral 1462 de la ley mercantil en cita. - - - Es decir, los jueces no están

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.b
26/05/24 17:00:00



Violaciones formales. - - - a) Falta de fundamentación y motivación. - - - En primer término es infundado el motivo de inconformidad en el cual aducen los agraviados que la resolución reclamada carece de fundamentación y motivación en razón de lo siguiente. - - - El artículo 16 de nuestra Carta Magna, que textualmente dice: - - - ‘Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o derechos, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.’. - - - La disposición constitucional antes transcrita se constituye como un derecho de seguridad jurídica en favor de los gobernados, pues exige los siguientes requisitos en la emisión de cualquier acto de molestia proveniente de una relación pública de supra-subordinación: - - - 1. Que provenga de autoridad competente; - - - 2. Que se encuentre fundado y motivado, y - - - 3. Que conste por escrito. - - - El primero de los requisitos en cuestión, indudablemente es la positivización del principio de legalidad que rige dentro del sistema jurídico mexicano, en el que las facultades de las autoridades deben reconocerse en una ley, por lo que su conducta se encuentra indefectiblemente subordinada a un ordenamiento de carácter general,

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.b7
26/05/24 17:00:00

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.b7
26/05/24 17:00:00

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.b7
26/05/24 17:00:00

² El cual puede estar constituido por uno o más árbitros.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.b7
26/05/24 17:00:00



5 “33.3 Arbitraje. Cualquier controversia, reclamación, diferencia o disputa que surja de, se relacione con el conexasión con este Contrato o el incumplimiento del mismo que no pueda ser resuelta amistosamente por las Partes y que no pueda decidirse por un Experto Independiente conforme a la Cláusula 33.2, o en caso de un error en su decisión, tal controversia se resolverá finalmente mediante un arbitraje que se llevará a cabo en la Ciudad de México, México y se conducirá de conformidad con las Reglas de la Asociación Americana de Arbitraje ('AAA') que se encuentren vigentes al momento de que el administrador reciba la solicitud de arbitraje por primera vez. Las disputas por un monto de US\$1,000,000 o menos serán decididas por un solo árbitro seleccionado de común acuerdo con los procedimientos de la AAA. Las disputas que involucren más de US\$1,000,000 serán decididas por tres (3) árbitros, en donde la Parte que inicia el procedimiento de arbitraje nombrará un árbitro y la notificará a la otra Parte dentro de los diez (10) días siguientes; la otra parte deberá nombrar un árbitro dentro de los diez (10) días siguientes; y, dentro de los 10 días posteriores, ambos árbitros designarán a un tercer árbitro. En caso de que ambos árbitros no puedan nombrar a un tercer árbitro dentro del plazo de diez (10) días, el tercer árbitro será nombrado por la AAA. - - - La decisión de los árbitros será (i) concluyente, final, y vinculante para el Propietario y el Proveedor; (ii) el único y exclusivo recurso de las Partes respecto de todas y cada una de las demandas y reconvenciones presentadas al árbitro o al tribunal arbitral; y (iii) ejecutables en cualquier tribunal de jurisdicción competente. Las decisiones del tribunal arbitral serán finales y vinculantes para todas las partes del arbitraje y no habrá apelación del laudo arbitral [...]

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.b7
26/05/24 17:00:00

7 “Artículo 1457. Los laudos arbitrales sólo podrán ser anulados por el juez competente cuando: - - - I. La parte que intente la acción pruebe que: - - - a) Una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiese indicado a ese respecto, en virtud de la legislación mexicana; - - - b) No fue debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no hubiere podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos; [...]”

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.5
26/05/24 17:00:00



⁹ “Artículo 1457. Los laudos arbitrales sólo podrán ser anulados por el juez competente cuando: - - - l. La parte que intente la acción pruebe que: - - - d) La composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ajustaron en el acuerdo celebrado entre las partes, salvo que dicho acuerdo estuviera en conflicto con una disposición del presente Título de la que las partes no pudieran apartarse o, a falta de dicho acuerdo, que no se ajustaron al presente Título, o; [...]”

designados de conformidad con lo establecido en la cláusula arbitral y las Reglas de la Asociación Americana de Arbitraje; ii) El procedimiento se llevó a cabo de forma confidencial y en el idioma español; iii) La interpretación de los contratos '**', se realizó conforme a las leyes federales de México; iv) se celebró una audiencia de procedimiento para organizar el resto del procedimiento, y; iv) El tribunal arbitral dirigió el orden de las pruebas, mismas que se desahogaron a través de audiencias; por tanto, advirtió que el aludido procedimiento se tramitó***



*conforme a lo establecido por las partes y a lo previsto en las Reglas de la Asociación Americana de Arbitraje, y por ende no quedó acreditada la causa de nulidad solicitada por los impetrantes del amparo. De ahí que la resolución reclamada sí se encuentra debidamente motivada, resultando por ello infundado el concepto de violación en estudio. - - - b) Falta de congruencia y violación a las formalidades esenciales del procedimiento. - - - Ahora bien, los quejosos alegan que la resolución reclamada carece de congruencia y que se violaron las formalidades esenciales del procedimiento, pues estiman que las demandas en reconvención de los terceros interesados ******

****** , y ******

****** , no reunían los requisitos estipulados en el artículo 1378 del Código de Comercio, pues no contenían el capítulo de ‘pruebas’ en el que exhibieran y ofrecieran tales medios de convicción que se relacionen con los hechos en dichos ocursos, fueron omisas en exhibir el acuerdo arbitral en original o en copia certificada con su debida traducción al español como lo establece el artículo 1461 del Código de Comercio, que en lugar de desahogar la prevención que les fue formulada en*

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.b
26/05/24 17:00:00

***** ; *****

***** y (iv)

el veinte de febrero de dos mil veinte, por los

Licenciados, ** * * * * * ,**

del Centro Internacional para la Resolución de Disputas (CIRD) de la Asociación Americana de Arbitraje (AAA), en el expediente identificado bajo el número “ *****”, es nulo por acreditarse***

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a,66.20.63.6a,66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.b
26/05/24 17:00:00

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a,66.20.63.6a,66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.b
26/05/24 17:00:00

10 “Artículo 1461.- Un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que haya sido dictado, será reconocido como vinculante y, después de la presentación de una petición por escrito al juez, será ejecutado de conformidad con las disposiciones de este capítulo. - - - La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá presentar el original del laudo debidamente autenticado o copia certificada del mismo, y el original del acuerdo de arbitraje a que se refieren los artículos 1416 fracción I y 1423 o copia certificada del mismo. Si el laudo o el acuerdo no estuviera redactado en español, la parte que lo invoca deberá presentar una traducción a este idioma de dichos documentos, hecha por perito oficial.”

irrevocable de administración y pago ‘***’ y del fideicomiso irrevocable de administración y pago ‘*****’. - - Sin que le asista la razón a los quejosos que hayan exhibido las copias certificadas de los contratos denominados «***** **** ****

******* ** * ***** ***** ****»**

(contratos para la adquisición de una unidad modular de perforación), y sus traducciones al castellano por perito autorizado donde se contienen también esos acuerdos de arbitraje, y no así los terceros interesados, pues constituye prueba plena de conformidad por los artículos 1241 y 1296 del Código de Comercio, que establecen lo siguiente: - -

- ‘Artículo 1241. Los documentos privados y la correspondencia procedentes de uno de los interesados, presentados en juicio por vía de prueba y no objetados por la parte contraria, se tendrán por admitidos y surtirán sus efectos como si hubieren sido reconocidos expresamente. Puede exigirse el reconocimiento expreso si el que los presenta así lo pidiere; con este objeto se manifestarán los originales a quien deba reconocerlos y se le dejará ver todo el documento, no sólo la firma’.- - -

‘Artículo 1296. Los documentos privados y la correspondencia procedentes de uno de los interesados, presentados en juicio por vía de prueba y no objetados

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.b7
26/05/24 17:00:00

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.b
26/05/24 17:00:00

Octubre de 1997, relativo a la Décima Época, con número de registro digital 2012891, página 2923, cuyo rubro y texto siguiente: - - - 'DOCUMENTOS FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN. NO REQUIEREN AUTO EXPRESO DE ADMISIÓN PARA SER VALORADOS EN SENTENCIA DEFINITIVA.'. (Se transcribe texto). - - - c) Formalidades esenciales del procedimiento. - - - Por otra parte, no le asiste la razón al inconforme al estimar que la resolución reclamada haya violado las formalidades esenciales del procedimiento, pues no hay que perder de vista que como mínimo, el debido proceso es un principio que exige que una persona sea escuchada antes de resolverse una cuestión que le puede afectar, lo que se logra claramente cuando se constata (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas, motivo por el cual la sentencia reclamada en su calidad de acto jurídico unitario, no puede ser violatoria de las formalidades esenciales del procedimiento, toda vez que éstas se traducen en un acto de notificación o emplazamiento, que tiene por objeto que la parte conozca de la existencia del

***** * ***** **como entidad**

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.5
26/05/24 17:00:00

transgrede el orden público, el juzgador no debe ordenar su ejecución, pero si solamente perjudica intereses privados debe ordenarla. Además, como ya se apuntó en párrafos que anteceden, solamente se podrá denegar el reconocimiento o la ejecución, cuando la parte contra la cual se invoca el laudo, acredite que estaba afectada por alguna incapacidad, o que el acuerdo arbitral no es válido; que no se haya notificado debidamente de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o bien, que alguna de las partes no hubiere podido hacer valer sus derechos; que el laudo se refiera a una cuestión no prevista en el acuerdo de arbitraje o que dicho laudo contenga decisiones que excedan los términos del acuerdo de arbitraje; la composición del tribunal arbitral o el procedimiento no se ajusten al acuerdo celebrado entre las partes o bien que el laudo aún no fuera obligatorio para las partes, así como que la ejecución del laudo sea contrario al orden público, de ahí que las cuestiones alegadas por los quejosos no sean susceptibles de revisión en esta instancia constitucional, por ser aspectos de fondo. - - - Aunado a lo anterior, tampoco asiste la razón a los quejosos en cuanto a que el laudo arbitral de veinte de febrero de dos mil veinte, por los licenciados,

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.b7
26/05/24 17:00:00

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.5
26/05/24 17:00:00

podrán convenir la aplicación de derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles y celebrar acuerdos arbitrales cuando así convenga al mejor cumplimiento de su objeto.'. - - -

‘Artículo 6°. Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere. Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan serán siempre en efectivo y en ningún caso se concederán por los servicios que se presten y las obras que se ejecuten propiedad sobre los hidrocarburos, ni se podrán suscribir contratos de producción compartida o contrato alguno que comprometa porcentajes de la producción o del valor de las ventas de los hidrocarburos ni de sus derivados, ni de las utilidades de la entidad contratante. - - - Petróleos Mexicanos no se someterá, en ningún caso, a jurisdicciones extranjeras tratándose de controversias referidas a contratos de obra y prestación de servicios en territorio nacional y en las zonas donde la Nación ejerce soberanía, jurisdicción o competencia. Los contratos podrán incluir acuerdos arbitrales conforme a las leyes mexicanas y los tratados internacionales de los que México sea parte. - - - Petróleos Mexicanos, los

y Organismo del Diario
ero de c
y sus c
os son lo
relativa
demás

“Artículo 4°.- Petróleos Mexicanos y sus organismos descentralizados, de acuerdo con sus respectivos objetos, podrán celebrar con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios y contratos y suscribir títulos de crédito; manteniendo en exclusiva la propiedad y el control del Estado Mexicano sobre los hidrocarburos, con sujeción a las disposiciones legales aplicables.”

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.b7
26/05/24 17:00:00

****, y *****, del Centro Internacional



******, así como su reconocimiento y ejecución, lo que no se traduce en una transgresión a su derecho de acceso a la justicia, ya que en la sentencia reclamada el A quo destacó que su actuación se constrictó a la determinación de la presencia de una de las causales de nulidad o de no ejecución previstas en el artículo 1457 del Código de Comercio, máxime que no está facultado para justipreciar la correcta valoración de las pruebas sobre los hechos controvertidos ni la exacta aplicación del derecho de fondo, únicamente decide si se ha presentado un vicio en la emisión del laudo, que justifique su invalidación, por las causas expresamente establecidas en el precepto referido, y toda vez que se reunieron los elementos que la ley establece como necesarios para pedir la solicitud de reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral, declaró procedente su ejecución, aunado al hecho que quedó establecido resultó improcedente la nulidad del laudo arbitral solicitado por los peticionarios del amparo. - - - De igual forma es aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 90/2017 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de quince de**

*‘DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN.’. (Se transcribe texto). - - - **Es aplicable en la especie la jurisprudencia***

visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo I, Segunda parte-1, página 186, bajo el rubro y texto siguiente: - - - 'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INFUNDADOS.'. (Se transcribe texto). - - -

De ahí que ante la ausencia de una adecuada impugnación, debe permanecer incólume para continuar rigiendo el sentido del expresado acto reclamado, sin que en el caso, se actualice ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 79, de la Ley de Amparo, en que deba suplirse la queja; además, de que este juzgador se circunscribirse a la litis planteada, sin poder manifestar de propia iniciativa algún vicio que se advierta, sino en virtud

deficiente, en términos del artículo 79, fracción VI de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada. - - - [...].”

CUARTO. Agravios. Las quejas formularon los motivos de inconformidad que consideraron pertinentes los cuales se tienen aquí por reproducidos para los efectos legales conducentes.

QUINTO. Facultad de atracción. Mediante escrito presentado el tres de abril de dos mil veintitrés, la parte recurrente hizo del conocimiento de este tribunal federal que solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerciera la facultad de atracción respecto del conocimiento del presente recurso.

Por auto de cuatro de abril de dos mil veintitrés, la Presidencia de este Tribunal Federal determinó que en relación con dichas manifestaciones sería el Pleno de este órgano jurisdiccional quien se pronunciaría al respecto.

Posteriormente, se hizo del conocimiento de este tribunal federal el auto de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, en el que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en relación con la solicitud planteada por la parte quejosa, en el sentido de que no ejercía la facultad de atracción para el conocimiento de este

“***** * ***** *****

Una vez que el Fideicomiso obtuviera la Propiedad del Equipo Modular de Perforación, éste lo otorgaría en arrendamiento financiero a *** mediante un contrato de arrendamiento financiero con opción a compra. - - - II. Conforme al fallo de fecha catorce de noviembre de dos mil catorce, la institución bancaria ganadora del Procedimiento de Subasta fue

***** ** ***** ***** *****

***** , - - - **III. Para implementar**

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.67
26/05/24 17:00:00



*para financiar parcialmente la adquisición del Equipo Modular de Perforación, y celebre los demás Documentos de Crédito (ii) celebre con “******

****** **** ***** ***** ******

****** ***** ***** ***** ***** y*

****** ***** ***** ***** ******

****** ** ***** ***** (conjuntamente el*

*“Constructor”) el Contrato de Ingeniería, Procura y Construcción (...) con el objeto de que el Constructor construya el Equipo Modular de Perforación y el mismo sea adquirido por el Fideicomiso, (iii) celebre con *** el Contrato de Arrendamiento Financiero (...), a efecto de que una vez construido y adquirido el Equipo Modular de Perforación, éste sea dado en arrendamiento financiero a ***, (iv) utilice las rentas y otros montos a ser pagados bajo el Contrato de Arrendamiento Financiero para solventar íntegramente las obligaciones de pago bajo los Documentos de Crédito, (v) mantenga la propiedad del Equipo Modular de Perforación durante el plazo del Contrato de Arrendamiento Financiero, y (vi) una vez finiquitadas las obligaciones bajo los Documentos de Crédito y vencido el plazo del Contrato de Arrendamiento Financiero, transfiera la propiedad del Equipo Modular de Perforación a ****

en los términos del Contrato de Arrendamiento Financiero.”

De tal transcripción se advierte que de un procedimiento de subasta celebrado por *****

* ***** derivó el fideicomiso amparado en la citada escritura, que tenía como fin que la institución o instituciones financieras contratadas le proporcionaran el financiamiento necesario para pagar el precio de adquisición de un Equipo Modular de Perforación; que una vez que el fideicomiso obtuviera la propiedad del equipo se lo otorgaría en arrendamiento financiero y que el fideicomiso celebraría con

***** ***** **** ***** *****
***** ***** ***** ***** y *****
***** ***** ***** ***** ** ***** *****

un Contrato de Ingeniería, Procura y Construcción (IPC) con el objeto de que éstas construyeran el Equipo Modular de Perforación y el mismo fuera adquirido por el fideicomiso.

Mediante escritura pública ***** * ***** ***

***** ***** de veintisiete de noviembre de dos mil catorce, otorgada ante el Notario Público *** de esta Ciudad, se hizo constar el Contrato de Fideicomiso Empresarial Irrevocable de Administración y Pago identificado con el número “F/****”, que celebran por una primera parte *****

***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** , como fideicomitente-

De tal transcripción se advierte que el objeto del contrato citado es la compraventa de una Unidad Modular de Perforación que construirían las proveedoras.

“33.3 Arbitraje. Cualquier controversia, reclamación, diferencia o disputa que surja de, se relacione con o en conexión con este Contrato o el incumplimiento del mismo que no pueda ser resuelta amistosamente por las Partes y que no pueda decidirse por un Experto independiente conforme a las Cláusula 33.2, o en el caso de un error en su decisión, tal controversia se resolverá finalmente mediante un arbitraje que se llevará a cabo en la Ciudad de México, México y se conducirá de conformidad con las Reglas de la Asociación Americana de Arbitraje (“AAA”) que se encuentren vigentes al momento de que el administrador reciba la solicitud de arbitraje por primera vez. Las disputas por un monto de US\$1’000,000.00 (un millón de dólares 00/100) o menos serán decididas por un solo árbitro seleccionado de acuerdo con los procedimientos de

Además, se precisaron los términos de la decisión arbitral dependiendo el monto de la disputa y el alcance de la decisión.

“33.1 Ley Aplicable. El contrato se regirá y será interpretado de acuerdo con las leyes federales de México, sin tener en cuenta las leyes mexicanas sobre conflictos de leyes. Además, las Partes acuerdan expresamente que las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías no se aplicarán a este Contrato y no tendrán ninguna aplicación en cuanto a la interpretación, cumplimiento o ejecución de este Contrato. Por lo tanto, se entiende que las Partes renuncian a la aplicación de la Convención de las

Del Capítulo 2 del laudo arbitral, relativo a los “***Antecedentes Fundamentales de la Controversia***”, se advierte lo siguiente:

- - (...) - - - 113. El 30 de septiembre de 2016 el Proveedor contestó formalmente a los Avisos de Intención del Propietario (...) presentando a lo largo de 175 hojas de extensión de esta comunicación aquellos argumentos e información que consideró relevante para desvirtuar los incumplimientos que le eran imputados por el Propietario (...). - - - 114. El 21 de octubre de 2016, el Ing. (...) de *** emitió los oficios número (...) dirigidos al Comité Técnico de ambos Fideicomisos (...) en los cuales señala que

17 En el laudo se definen como: “**Contrato IPC F/**** y Contrato IPC F/**** conjuntamente.**” En relación con la definición de cada uno, se señalan los siguientes términos: Contrato IPC F/**** Contract for the Acquisition of a Modular Drilling Unit de fecha diez de diciembre de dos mil catorce celebrado por el Fideicomiso F/**** y las demandantes en este arbitraje; Contrato IPC F/**** Contract for the Acquisition of a Modular Drilling Unit de fecha diez de diciembre de dos mil catorce celebrado por el Fideicomiso F/**** y las demandantes en este arbitraje.



habiendo analizado los argumentos y pruebas ofrecidos por el Proveedor en sus Respuestas a los Avisos de Intención del 30 de septiembre de 2016, PPS considera que no desvirtúa los incumplimientos que le son imputados para dar por terminados los Contratos IPC. (...): - - - (...) - - - 119. El 1º de diciembre de 2016, el Propietario envió al Proveedor dos notificaciones de terminación de los Contratos IPC (las “Notificaciones de Terminación”) (...) en las que hizo referencia a las Respuestas a los Avisos de Intención. En dichas notificaciones, el Propietario: (i) enumeró nuevamente los seis incumplimientos descritos en sus Avisos de Intención, señalando que el Proveedor no había logrado desvirtuar dichos incumplimientos; (ii) señaló que en términos de lo previsto en la cláusula 8.4 de los Contratos IPC, procede el pago de la pena convencional de US\$20’000,000.00 (...); (III) señaló que procede la devolución del Anticipo pagado al Proveedor; y (iv) requirió en términos de lo previsto en la cláusula 22.3 de los Contratos IPC, el pago de los daños y perjuicios derivados de los incumplimientos reclamados.”

De tal transcripción se advierte que se hizo constar que el uno de diciembre de dos mil dieciséis, los

Del Capítulo 6 del laudo arbitral, relativo a las ***“Posiciones de las partes con respecto a las reclamaciones en el arbitraje”***²⁰, se observan los argumentos de las demandantes en relación con la demanda (principal), en lo conducente, en los siguientes términos:

Básicamente, las demandantes pretendían que se determinara que la terminación de los contratos señalada con anterioridad no había surtido efecto legal alguno y que se declarara la terminación de los contratos por incumplimiento de su contraria.

En relación con los argumentos base de la

```
***** **y*****
*****
```

²⁰ Así titulado en el índice.

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.b7
26/05/24 17:00:00



guiente:

“593. Durante el arbitraje las Demandadas Reconvencionales alegaron que: (a) el Proveedor no incurrió en incumplimiento alguno de los Contratos ***; (b) en todo caso, los supuestos incumplimientos, al ser de carácter técnico, no hubieran facultado al Propietario a dar por

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.b7
26/05/24 17:00:00

reconvencional estaban íntimamente ligadas atendiendo al

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.b7
26/05/24 17:00:00

De tal transcripción se observa, en lo conducente, que se declaró que la terminación de los contratos *******, por parte de los Fideicomisos era legal y había surtido sus efectos a partir de su fecha de notificación; además, que resultaba procedente que las demandantes reembolsaran a los fideicomisos, las cantidades que se les habían

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.b7
26/05/24 17:00:00

Es decir, señalaron que el acuerdo de arbitraje no era válido, en virtud de la ley a que las partes lo sometieron, pues los contratos base de la acción en el arbitraje eran accesorios de diversos fideicomisos nulos, dado que fueron suscritos bajo una ley no aplicable al caso concreto, por lo que, en consecuencia, los contratos señalados en primer término corrían la misma suerte que los fideicomisos (nulidad).

Que del análisis del pacto arbitral, se advertía que el arbitraje estaba condicionado a dos supuestos antes de poder constituirse el Tribunal Arbitral; es decir, primero debió haberse agotado una conciliación entre las partes, y si no se podía, era necesaria la intervención de un tercero experto, lo cual nunca aconteció, ya que los fideicomisos, en vez de optar por arreglar pacíficamente la ejecución del contrato, los terminaron ilegalmente.

Además, que el laudo arbitral era contrario al orden público, pues de acuerdo con la ley aplicable al momento de la celebración de los fideicomisos y los contratos accesorios (contratos base de la acción en el arbitraje), éstos tenían naturaleza administrativa, pero no fueron así contratados, sino que se constituyeron en contratos privados, por lo que se

El argumento base de dicha excepción consistió en que ***“... ya existe cosa juzgada por la que se demuestra que el laudo arbitral fue dictado contrariamente al orden público y, por ende, no procede el reconocimiento y ejecución del mismo que solicitan las actoras en reconvencción...”***

El laudo que se analiza no es contrario al orden público, pues con lo resuelto en aquél no se afectan los intereses fundamentales de la sociedad, lo que se afirma de ese modo, porque la decisión ahí tomada no trasciende a la sociedad, en tanto que no transgrede principios o normas que conforman las instituciones jurídicas del Estado, esto es, no priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes, como sería el caso –a manera de ejemplo-, cuando el laudo en sí o su ejecución pudiera implicar la comisión de un acto ilícito conforme a la normatividad del país, lo que no acontece en el caso concreto, pues los argumentos en que se

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.b7
26/05/24 17:00:00

Luego, si en los contratos *** se pactó el arbitraje como medio de solución de controversias, es que el tribunal arbitral sí tenía facultades para dirimir la controversia que se sujetó a su potestad –rescisión de los contratos ***-.

En el caso, de las cláusulas 33.1 y 33.3 de los contratos *** se aprecia que las actoras y una de las codemandadas establecieron que la legislación aplicable para la interpretación del acuerdo de voluntades lo serían las leyes federales de México, sin tener en cuenta, aquellas que se refieran sobre conflicto de leyes; además, estipularon que las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías no se aplicarían al contrato, por lo que renunciaban a lo establecido en dicho ordenamiento.

²³ Unidades Modelo de Perforación.



Asimismo, pactaron que cualquier disputa relacionada con dichos acuerdos volitivos que no pudiera decidirse por un “Experto independiente”, serían resueltas a través de un arbitraje.

En ese sentido, no se advierte que alguna norma mexicana establezca que la cláusula arbitral fuera nula, consecuentemente dicha estipulación era válida y debe regir para los signantes de los contratos ****

No pasaban inadvertidas las manifestaciones de las actoras, en el sentido de que en la controversia arbitral se aplicó una ley que no estaba vigente al momento de celebrarse el acuerdo arbitral, pero dicho aserto no puede conllevar a declarar la nulidad de la cláusula de arbitraje, pues la aplicación de una determinada norma en el laudo es un aspecto de fondo que no puede analizarse, ya que la acción de nulidad de un laudo arbitral no tiene el alcance de discutir el mayor o menor fundamento de lo resuelto por el tribunal arbitral, por lo que no queda demostrada la causa de nulidad examinada.

Más aún que las partes no pueden desconocer la cláusula que contiene el acuerdo de arbitraje comercial, pues sería tanto como desconocer la voluntad que tuvieron de obligarse a someter sus controversias ante dicho arbitraje, es decir, las partes deben ser fieles al compromiso arbitral que han pactado.

“PRIMERO. Ha sido procedente la vía especial sobre transacciones comerciales y arbitraje, en donde las actoras: (...) no probaron las causas de nulidad que invocaron. - - - SEGUNDO. Consecuentemente, no resulta procedente declarar la nulidad del laudo arbitral emitido el veinte de febrero de dos mil veinte, por (...). - - - TERCERO. En la reconvención, “**

c) En la especie, el juez responsable advirtió que el procedimiento arbitral se tramitó conforme con lo establecido por las partes y lo previsto en las Reglas de la Asociación Americana de Arbitraje y, por ende, no quedó acreditada la causa de nulidad solicitada por las quejas, de lo que deriva que la resolución reclamada se encuentra debidamente motivada (con lo que se desestimó el concepto de violación relativo a la falta de fundamentación y motivación en el acto reclamado).

e) Los terceros interesados cumplieron con los

h) Los jueces no están autorizados para revisar los laudos de manera integral, pues de lo contrario podrían nulificarlos aun por cuestiones de fondo; además, el sistema generalmente adoptado consiste en que si la violación contenida en el laudo transgrede el orden público, el juzgador no debe ordenar su ejecución, pero si solamente perjudica intereses privados debe ordenarla –con lo que concluyó que las cuestiones alegadas por las quejas no eran susceptibles de revisión en la instancia constitucional, por ser aspectos de fondo-.

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.67
26/05/24 17:00:00

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.b7
26/05/24 17:00:00



I) En consecuencia, las controversias suscitadas en los contratos de obra a precio alzado sí podían ser sometidas al arbitraje.

Solución del caso, materia del presente recurso de revisión.

Precisados los antecedentes del caso, cabe señalar la regulación legal de las acciones planteadas dentro del juicio de origen.

La nulidad de laudo arbitral se encuentra prevista en el artículo 1457 del Código de Comercio que establece²⁴, en lo que al caso interesa y trasciende a la materia del recurso²⁵, que los laudos arbitrales sólo podrán ser anulados por el juez competente cuando la parte que intente la acción pruebe que el acuerdo de arbitraje no es válido en virtud **de la ley a que las partes lo han sometido**, o bien, el juez compruebe que, **según la legislación mexicana, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje**, o que el laudo es **contrario al orden público**.

Al respecto, cabe destacar lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo Directo en Revisión 7790/2019²⁶, resuelto en sesión de cinco de agosto de dos mil veinte, relativo a la

24 “Artículo 1457. Los laudos arbitrales sólo podrán ser anulados por el juez competente cuando: - - - I. La parte que intente la acción pruebe que: - - - a) Una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiese indicado a ese respecto, en virtud de la legislación mexicana; - - - b) No fue debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no hubiere podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos; - - - c) El laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje. No obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, sólo se podrán anular estas últimas; o - - - d) La composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ajustaron en el acuerdo celebrado entre las partes, salvo que dicho acuerdo estuviera en conflicto con una disposición del presente título de la que las partes no pudieran apartarse o, a falta de dicho acuerdo, que no se ajustaron al presente título; o - - - II. El juez compruebe que, según la legislación mexicana, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje, o que el laudo es contrario al orden público.”

²⁵ Relacionado con el problema jurídico planteado en el caso concreto.

²⁶ Que se obtiene del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y se invoca como hecho notorio, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.



revisión judicial de un laudo, para efectos de decidir sobre su nulidad.

Nuestro Más Alto Tribunal determinó que debe tomarse en cuenta que el arbitraje supone un acto de voluntad formalizado y sancionado por la ley, que por ministerio de ésta se encuentra reforzado, por lo que su regularidad jurídica **debe examinarse en sede judicial de manera excepcional**, modulándose para adaptarse al tipo de libertades involucradas, y para ello, la interpretación de los jueces no implica sustituir el juicio arbitral, sino adoptar un estándar de revisión judicial que, sin renunciar a su obligación de analizar las causas de nulidad del laudo, resulte equilibrado en cada caso, para no vaciar de contenido el poder del árbitro, pues la naturaleza propia del arbitraje es limitar el alcance del poder de revisión judicial sobre la validez del laudo, y a diferencia de un medio de impugnación ordinario donde es posible que un acto pueda ser revisado de *novo* por el *ad quem* con el mismo poder interpretativo, cuando se analiza la validez de un laudo arbitral los jueces deben auto-restringirse y no someter a escrutinio las operaciones interpretativas de los árbitros con el mismo alcance con el que se revisa a una instancia judicial inferior.

Indicó que en la revisión que corresponde al juicio de nulidad no es permisible el control judicial del laudo en forma semejante a un recurso ordinario en sede judicial; que

Destacó que las causas de nulidad previstas en el artículo 1457 del Código de Comercio deben analizarse en la forma y medida que lo exija la naturaleza e implicaciones de cada una de ellas, estableciendo un cuidadoso, razonable y equilibrado parámetro de interpretación, pues como indicó, deben tratarse como excepciones a la presunción de regularidad del laudo, como documento definitivo y vinculante para las partes en el procedimiento arbitral, por ende, su interpretación y aplicación debe ser estricta.

El artículo 1461 del Código de Comercio²⁷ establece que un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que haya sido dictado, será reconocido como vinculante y, después de la presentación de una petición por escrito al juez, será ejecutado de conformidad con las disposiciones del capítulo

27 “Artículo 1461. Un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que haya sido dictado, será reconocido como vinculante y, después de la presentación de una petición por escrito al juez, será ejecutado de conformidad con las disposiciones de este capítulo. - - - La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá presentar el original del laudo debidamente autenticado o copia certificada del mismo, y el original del acuerdo de arbitraje a que se refieren los artículos 1416 fracción I y 1423 o copia certificada del mismo. Si el laudo o el acuerdo no estuviera redactado en español, la parte que lo invoca deberá presentar una traducción a este idioma de dichos documentos, hecha por perito oficial.”

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo 71/2014³², señaló que el **reconocimiento de un laudo arbitral** es el acto formal realizado por la autoridad judicial y que lo declara como final y obligatorio sobre los puntos controvertidos entre las partes; el efecto de este procedimiento jurisdiccional es el de darle efectos jurídicos a los resolutivos de un laudo, aunque ello no involucre su ejecución activa, concepto que deriva de la noción de que existen diferencias entre el reconocimiento del laudo y su ejecución; es decir, un laudo puede ser reconocido sin ser ejecutado, pues éste puede ser aportado a un juicio como prueba de que una controversia sobre la que versa un juicio ya representa cosa juzgada (*res judicata*) y, por ende, no sería necesario re-litigar el asunto; así como también puede ser reconocido para aportarse como prueba y fundamento de la compensación; y que la **ejecución de un laudo** es el medio para que se materialicen

³² Que se obtiene del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y se invoca como hecho notorio, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.



En principio, se destaca que en la sentencia recurrida sí se precisó el acto reclamado de conformidad con lo señalado por la propia quejosa, tal como se observa del resultando primero de dicha resolución, en relación con el considerando segundo, relativo a la certeza del acto reclamado, consistente en la sentencia dictada en el juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje en el expediente ***** del índice del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en esta Ciudad, de veinticinco de abril de dos mil veintidós, por lo que es infundada la

origen a la institución afianzadora, esencialmente porque lo
resuelto en éste puede depararle perjuicio.

Es infundado su argumento, en primer lugar, porque en todo caso se trata de una cuestión que debió procurar se colmara dentro del curso del procedimiento de la manera en que ahora lo plantea.

Pero independientemente de ello, también cabe señalar que mediante escrito presentado en abril de dos mil veintiuno³⁵ compareció al juicio de origen, *****

***, antes

***** , a desahogar la vista ordenada en proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, en el que se admitió la solicitud de medidas cautelares realizada por las actoras en la que se decretó de manera provisional una medida cautelar para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que actualmente guardan, esto es, si la afianzadora no lo había realizado, no hiciera el pago del monto de las cantidades amparadas en las pólizas de fianza respectivas, derivado de la reclamación presentada por ***** , hasta en tanto se resolviera el fondo de la controversia.

Esto implica que la afianzadora citada tuvo conocimiento del juicio de origen y por ello estuvo en aptitud de hacer valer lo que considerara pertinente de estimar que

³⁵ Día ilegible.

- **En relación con la causal de nulidad señalada en primer término**, consistente en que el acuerdo de arbitraje no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, se advierte que sanciona el acuerdo o cláusula de arbitraje por no ser válida de conformidad con la ley a que las partes se sometieron o si nada se indicó al respecto en virtud de la legislación mexicana.

En particular, a efecto de verificar a su vez la legislación federal aplicable que rige y a la que deberá acudirse para su interpretación, se atiende sólo a la

³⁶Cláusula 33.1 señalada con anterioridad.



La parte hoy recurrente apoyó esta causa, esencialmente, en que no es válido el acuerdo de arbitraje pues no se permitía por la Ley de Petróleos Mexicanos vigente en el año dos mil ocho⁴¹. Sin embargo, aun así, es de observarse que su planteamiento de nulidad lo basó en la aducida ilicitud de los contratos de fideicomiso en los que no fue parte, mas no de manera directa en los contratos que contienen los acuerdos arbitrales que dieron origen al

41 En su escrito inicial de demanda, al referirse a esta causal de nulidad, la parte actora señaló, lo siguiente (se transcribe nuevamente): ***“Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1457 inciso a) fracción I, del Código de Comercio en su parte relativa que dice: “...o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido...” en virtud de que los contratos E.P.C. del cual emana el pacto arbitral y consecuencia directa el laudo, son dos contratos accesorios de sus principales, los Fideicomisos ***** y ***** , los cuales están tildados de nulidad, ya que fueron suscritos y signados bajo una ley no aplicable al caso concreto (ley de PEMEX), por lo tanto lo accesorio corre la misma suerte de lo principal...”***

procedimiento arbitral, que fueron el objeto de análisis en éste.

Es decir, la recurrente pretende se examinen, a la luz de esta causal de nulidad, actos jurídicos ajenos que no contienen el acuerdo arbitral que dio origen al laudo arbitral impugnado, y que incluso tampoco fueron materia de decisión dentro de éste, cuando que lo que debe analizarse a la luz de esta causa es exclusivamente el acto que contiene el acuerdo arbitral en el que se apoyó el procedimiento que concluyó con el laudo cuya nulidad se reclama y éste se advierte contenido en los contratos *** o *** que han sido examinados.

Por tal motivo, son ineficaces todos los motivos de inconformidad que vierte la recurrente, relacionados con que debió analizarse esta causa de nulidad conforme con las disposiciones relativas de la Ley de Petróleos Mexicanos vigente en el dos mil ocho, así como que no les resultaba aplicable la Ley de Petróleos Mexicanos publicada en el año dos mil catorce (aplicación retroactiva de la ley en su perjuicio), para fijar su validez.

La recurrente sostiene que los fideicomisos son nulos porque tienen naturaleza administrativa y no mercantil, como se advierte de la legislación aplicable, que no es la publicada en el año dos mil catorce.

Sin embargo, a los contratos en los que se pactaron los acuerdos arbitrales no les resulta aplicable este

En su caso, de considerar la quejosa que estaba legitimada para impugnarlos, como ahora pretende, debió hacerlo oportunamente, es decir, previamente a instar el

⁴² Petróleos Mexicanos

Cabe señalar que a criterio de este tribunal, el hecho de que la autoridad responsable y el juez federal hubieran examinado la legalidad de los fideicomisos, es decir que hubieran atendido lo relativo a su constitución y señalado las razones por las que consideraron que se constituyeron acorde con la legislación aplicable⁴⁴ (lo que ahora combate

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.67
26/05/24 17:00:00

• Sólo se permitía a *****
***** contratar con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y regulada su actuación exclusivamente por el derecho público, por lo que es falso el argumento del a quo relativo a que sí tenía facultades para contratar con privados (sic).

• ***** * ***** no podía celebrar fideicomisos privados, por existir leyes administrativas que regulan su actividad y cita los ordenamientos que dice prohibían la celebración de fideicomisos privados.

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.b7
26/05/24 17:00:00

● ***** ***** * ***** cometió actos ilícitos.

- fundamentos que sirvieron de base para el procedimiento de contratación por medio de subasta, en virtud de que aplicó otras leyes durante el procedimiento de contratación que no le facultaban para actuar como lo hizo.

- Contrario a derecho, se actuó conforme a la Ley de Petróleos Mexicanos de dos mil catorce que entró en vigor hasta el veintiocho de abril de dos mil quince y de conformidad con las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil quince, es decir, no se atendió el principio de no retroactividad de las leyes en materia contractual.

- MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.67
26/05/24 17:00:00

entes paraestatales regulados por el derecho público, por lo que correspondía a juzgadores administrativos resolver sobre las controversias que dieron origen a la rescisión de los contratos ^{***}, pero no al tribunal arbitral.

Es así, porque como se indicó, los fideicomisos que impugna no son el objeto de análisis de la causa de nulidad examinada, y además porque en su caso debe partirse de la base de que se trata de actos jurídicamente existentes por no advertirse hayan sido declarados nulos, e incluso aceptados por la parte ahora recurrente para celebrar los contratos base de la acción.

Cabe advertir que la recurrente señala que no se abordó la excepción superveniente que hizo valer, ni se consideró la prueba que ofreció para demostrar dicha excepción, consistente en la sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictada dentro del juicio de amparo directo en revisión 1015/2021⁴⁵.

⁴⁵ En dicha resolución ***“El tema de decisión en el presente asunto consiste en determinar si la Ley de Petróleos Mexicanos publicada el once de agosto de dos mil catorce, en especial su artículo 80 (...), resulta aplicable o no desde el ámbito temporal de validez, para determinar la naturaleza de los contratos de arrendamiento base de la acción y, por ende, la vía para exigir su cumplimiento, sobre la base de que este ordenamiento deriva de la reforma constitucional de los artículos 25 y 27 constitucionales.*”**

Se determinó que ***“Así las cosas, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el citado artículo 80 de la nueva Ley de Petróleos Mexicanos no es aplicable a los contratos de arrendamiento base de la acción, toda vez que estos fueron celebrados con anterioridad a que dicha ley entrará en vigor (...).”***

Interpretando lo determinado por nuestro Más Alto Tribunal, la recurrente dice que el artículo 80 de la nueva Ley de Petróleos Mexicanos que prevé esencialmente, que todos los actos que se desarrollen dentro del procedimiento de contratación regulado en el capítulo respectivo, hasta el momento del fallo, inclusive, serán de naturaleza administrativa y que una vez firmado el contrato, éste y todos los actos o aspectos que deriven del mismo serán de naturaleza privada y se regirán por la legislación mercantil o común aplicable, no resultaba aplicable a los contratos de fideicomisos relacionados, por lo que sobre esa base concluye que éstos debían considerarse de naturaleza

Además, destaca que no ha existido un pronunciamiento en relación con dicha excepción y la prueba respectiva, lo que la habría dejado en estado de indefensión.

No pasa inadvertido que la recurrente también

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.03.04.b
26/05/24 17:00:00

Este criterio se sostuvo en la tesis de rubro y texto⁴⁷:

“PERSONALIDAD. NO PUEDE DESCONOCERSE EN UNA ETAPA CONTENCIOSA LA QUE EXPRESAMENTE FUE ACEPTADA AL FORMALIZAR UN CONTRATO. El hecho de que al celebrarse un contrato en representación de una sociedad mercantil el contratante reconozca a quien comparece a nombre de aquélla la personalidad con que se ostenta, consignándose ese carácter en el documento en que aquél se formaliza, implica una aceptación expresa en términos del artículo 1803 del Código Civil Federal. Ahora bien, si posteriormente surge un conflicto que acarrea la tramitación de un juicio, bastará la exhibición del mencionado contrato para justificar la personería de quien representó a dicha sociedad, aun cuando no se exhiban los

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.b7
26/05/24 17:00:00

Básicamente, ahora que obtuvo una sentencia desfavorable, no puede ir en contra de sus propios actos, con el fin de evitarse un perjuicio y causarlo a su contraria, pues ya obtuvo los beneficios de los contratos que ahora impugna, y reconoció al tribunal arbitral (ante el cual se sometió conforme con la cláusula que así lo permitía, puesto que fungió como actora en ese procedimiento) lo cual tiene su base en el respeto al principio de buena fe, basado en la conducta coherente de las partes dentro de cualquier relación jurídica, procesal o sustantiva.

Más aún que se insiste, fue la propia quejosa quien instó el arbitraje, dejó que transcurriera todo el procedimiento hasta el dictado del laudo arbitral y ahora que le es adverso y favorable a su contraria, modifica su actitud y pretende dejar insubsistente todo el procedimiento surgido a su propia iniciativa para librarse de los perjuicios que le ocasionó.

Por lo tanto, atendiendo a su conducta, es que

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.67
26/05/24 17:00:00

también son ineficaces todos los argumentos relacionados con el análisis de la personalidad de su contraria en el procedimiento arbitral.

En su caso, las recurrentes también aluden a la impugnación del aspecto competencial del Tribunal Arbitral (sobre la misma base relativa a que no podrían conocer de los fideicomisos, por no tener una naturaleza mercantil), sin embargo, parten de una premisa incorrecta, pues el objeto del arbitraje no fue lo relacionado con los contratos de fideicomiso, sino los contratos *** o **** en los que la paraestatal no es parte, por lo que esta cuestión tampoco puede ser considerada para verificar la competencia del tribunal arbitral.

Como se ha establecido, el análisis de los fideicomisos no podía servir de base para verificar la causa de nulidad hecha valer por la inconforme, lo que tampoco puede ser objeto de estudio a la luz de las diversas causas de nulidad que hizo valer, por lo que debe tenerse en cuenta al resolver, como se verá a continuación.

En relación con la diversa causa de nulidad en que la actora apoya su pretensión, relativa a que el juez compruebe que, según la legislación mexicana, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje, este tribunal federal considera que tampoco se actualiza.

En la especie, el objeto de la controversia sometida

al arbitraje consistió en emitir un pronunciamiento en relación con la terminación de dos contratos *** o ***.

Respecto de esta causa de nulidad, en el amparo en revisión 755/2011⁴⁹, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ésta se presenta cuando el juez comprueba que según la legislación mexicana, el objeto de la controversia no era arbitrable, esto es, no era susceptible de someterse a consideración de un particular mediante el procedimiento de arbitraje.

Indicó que la propia ley reserva las materias que son de “orden público”, para que sean los órganos del Estado los que resuelvan las controversias en las que hayan de dilucidarse esos temas e impide que pueden someterse, por pacto o acuerdo entre las partes, al poderío de algún medio o instrumento ajeno a la jurisdicción propiamente del Estado.

A manera de ejemplo, señala que se encuentran las cuestiones relativas a alimentos, divorcios (excepto en cuanto a la separación de bienes y a las demás diferencias puramente pecuniarias), nulidad de matrimonio, estado civil de las personas, las que atañen a las facultades de que goza el comunero y el representante común designado por el juzgador en un juicio donde exista litisconsorcio, etcétera.

Es decir, nuestro Más Alto Tribunal estableció que

⁴⁹ Que se obtuvo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y se invoca como hecho notorio con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.



En esta causa de nulidad, el bien jurídico que se tutela atañe a que el arbitraje sólo puede versar sobre materias disponibles con arreglo a derecho y que tengan, por regla general, una connotación mercantil derivado del ordenamiento en que se regula la cuestión del arbitraje.

Básicamente, está relacionada con la licitud del objeto y el poder que tienen las partes para su disposición.

En la especie, como ya se señaló, el artículo 1416 del Código de Comercio (ordenamiento aplicable a la relación jurídica de las partes que fue objeto del arbitraje), establece que la partes pueden convenir un acuerdo arbitral, por el que someten a arbitraje todas o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual.

Entonces, como se observa, la ley permite que se sometan al arbitraje las controversias que surjan en una relación jurídica regida por dicha legislación, como es la que en la especie dio origen al arbitraje, contratos *** o ***.

Sobre esa base, es dable concluir que tampoco se actualiza la causa de nulidad relativa a que en la especie el objeto no era arbitrable, es decir, la terminación de los contratos.

Cabe destacar que para verificar el objeto del

Pero, además, porque como se indicó al analizar la diversa causa de nulidad que hizo valer la actora en el juicio de origen, aquí recurrente, no es dable partir de la base de que dichos actos son nulos bajo los argumentos que refiere, pues no es factible examinarlos dadas las razones anteriormente expuestas.

Por último, en relación con la causa de nulidad relativa a que el laudo arbitral es contrario al orden público, tampoco se actualiza.

Al respecto, en el amparo en revisión 755/2011 citado con anterioridad, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la nulidad de laudo arbitral es la vía de naturaleza procesal interdictal especial (la ley la denomina “incidental”) que se sustancia a petición de parte ante la potestad judicial y tiene por objeto anular el laudo cuando se presente algún motivo para ello, y de resultar procedente, el fallo arbitral quedará sin efectos a partir de la fecha que así lo declare el juez competente



(común o federal a elección del actor y por efectos de la jurisdicción concurrente).

En dicha resolución, nuestro Máximo Tribunal analizó específicamente los alcances del orden público en el tema del arbitraje.

Indicó que este supuesto parte de la base de que la causa era arbitrable, es decir, que el conflicto resuelto por el árbitro involucró temas que sí eran susceptibles de someterse a consideración de un particular, prescindiendo así de la intervención de los órganos jurisdiccionales del Estado, de manera que la nulidad que el juzgador pudiera advertir en el laudo dictado por aquél, tendría que originarse en la circunstancia de que lo decidido por dicho mediador es contrario al orden público, entendido éste, no solamente como aquello que no está disponible para las partes o para el árbitro, sino atendiendo a una concepción de “orden público” de mayor entidad.

Concluyó que era posible afirmar que un laudo arbitral es contrario al orden público y que, por ende, constituye una causa de nulidad, cuando la cuestión dilucidada se coloque más allá de los límites de dicho orden, es decir, más allá de las instituciones jurídicas del Estado, de los principios, normas e instituciones que lo conforman y que trasciende a la comunidad por lo ofensivo y grave del yerro cometido en la decisión.

Además, en relación con los conceptos de orden público e interés social, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación⁵⁰, ha determinado que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, en tanto el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo, se traduce en la

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.67
26/05/24 17:00:00



necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así, por disposiciones de orden público deben entenderse aquéllas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva o bien, le evite un trastorno o un mal público.

También, en relación con el concepto de orden público, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo 71/2014 citado con anterioridad, determinó que el orden público se localiza en el ámbito de los principios jurídicos, protegiendo las esencias fundamentales de las instituciones jurídicas, con la aclaración de que no se trata de un principio más, antes bien, sobre la base de que los principios jurídicos dan unidad al ordenamiento jurídico, el orden público, como principio fundamental, armoniza y jerarquiza esos principios.

Por su parte, al resolver el recurso de revisión R.C. 195/2010, cuyo criterio se comparte por ser acorde con lo aquí resuelto, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil

del Primer Circuito⁵¹ determinó, en cuanto a una definición de orden público, que se trata de un concepto contingente y mutable.

Que a través de la interpretación del ordenamiento jurídico es que puede obtenerse una definición aproximada de orden público que sirva para revelar el significado de dicho término en un momento concreto.

De acuerdo con el análisis que realiza del concepto de orden público, concluye que se advierte un nexo indisoluble entre el orden público y los fines del Estado; que la idea de orden público se asienta sobre la obligación del ciudadano de no perturbar con su actuación los fines que persigue la comunidad o la sociedad y de las facultades conferidas a los órganos del Estado para velar por su respeto.

Que por su carácter esencial, la noción de orden público comprende el conjunto de reglas que según una determinada visión histórica de la vida social y de las relaciones entre los individuos, resulta necesaria para la existencia del Estado y el desarrollo del individuo en equilibrio, armonía y paz, lo que atañe a la defensa de las libertades, derechos o bienes fundamentales del hombre y de los principios de su organización jurídica para realizarse

⁵¹ Que se obtiene del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y se invoca como hecho notorio, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.



Por ese motivo, para atender la causa de nulidad en

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.b
26/05/24 17:00:00

cuestión, su estudio se ciñe exclusivamente a la materia de lo resuelto en el laudo arbitral para medir su impacto en el ámbito del orden público, que es lo que se pretende evitar a través de su ejecución.

Por ello, es importante destacar que el análisis del orden público no impone que se verifique la legalidad de lo determinado en el laudo arbitral y menos aún la legalidad o no del pacto sometido a esa decisión, pues al revisarlo judicialmente debe partirse de la base de que el arbitraje supone un acto de voluntad formalizado y sancionado por la ley, por lo que la interpretación de los jueces no puede sustituir el juicio arbitral.

Este análisis únicamente implica examinar si lo ahí resuelto afecta o no a la sociedad de manera grave y/o exorbitante, lo que no acontece en el caso, pues no se observa que a ésta se le prive de un derecho o bien que se le imponga una carga que no debiera soportar, sino que solo se advierte una afectación a intereses particulares relacionado con la terminación de dos contratos y sus consecuencias, lo que no impacta en un perjuicio hacia la sociedad en general.

Más aún, porque el análisis de la nulidad de un laudo arbitral debe ser entendida como un mecanismo de control judicial del procedimiento arbitral, pero no como una vía para acceder a una instancia que revise integralmente la controversia resuelta por el laudo.

los conceptos de violación de la quejosa, encaminados a desvirtuar el estudio realizado por la autoridad responsable respecto de la acción principal.

En relación con la acción reconvencional

La recurrente aduce, básicamente, que el escrito reconvencional no se ajustó a las formalidades exigidas en el artículo 1378, fracción VIII, del Código de Comercio, pues su contraria no señaló capítulo de pruebas ni anexó a dicho escrito el acuerdo de arbitraje contenido en los dos contratos *** de diez de diciembre de dos mil catorce y su debida traducción, ni copia certificada del laudo arbitral, no obstante que es un requisito de procedibilidad para acreditar la acción de reconocimiento y ejecución ejercida.

Que en su escrito de desahogo de prevención en relación con la reconvención, ** ***** , alteró la litis ***** ** ***** , o amplió su demanda, en lugar de avocarse únicamente a la prevención ordenada.

Dice que no se advierte documento alguno que acredite las prestaciones reclamadas, por lo que no existe relación de las prestaciones solicitadas con los hechos expuestos, al no ofrecer pruebas para demostrarlos.

Señala que fueron ellas quienes exhibieron la prueba relativa y que no tenía por qué perfeccionarse la



decisión en cuanto a las pruebas no ofrecidas por las terceras interesadas en el juicio de origen.

Que por auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno, equivocadamente el juez responsable admitió las pruebas aportadas por una de las codemandadas, pues no se adjuntaron las pruebas documentales públicas y privadas que refiere.

Los argumentos antes sintetizados son ineficaces.

De las constancias del juicio de origen se advierte que se ordenó el emplazamiento a ***** *****

***** ***** ***** ** ***** *****

***** , como representante de los contratos de fideicomiso empresariales irrevocables de administración y pago, identificados con los números F/**** y F/****; a

**** ***** ***** ***** ***** ** *****

***** ***** ***** ***** ***** ; y a *****

***** * *****

Mediante escrito presentado en marzo de dos mil veintiuno⁵³, ** ***** ***** ***** *****

***** ***** , como representante de ***** ****

***** ***** ***** ***** ***** *****

***** ***** , contestó la demanda.

Además, reconvino la declaración de que el laudo final de veinte de febrero de dos mil veinte es válido, eficaz,

⁵³ Día ilegible.

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.03.04.17
26/05/24 17:30:00

reconocible y ejecutable.

A este escrito acompañó cinco anexos certificados. De manera destacada resalta el anexo tres que en el escrito de contestación de demanda refiere como la copia certificada del laudo final de veinte de febrero de dos mil veinte. (Foja 46).

Se observa que la citada codemandada no “ofreció” pruebas (en general).

Por auto de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno se previno a la codemandada para que señalara el nombre completo de los demandados, así como su domicilio y se aludió genéricamente a lo previsto en el artículo 1378 del Código de Comercio.

Mediante escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, la codemandada desahogó la prevención, refiriéndose a diversas fracciones del artículo 1378 del Código de Comercio y se observa que no ofreció pruebas, pero acompañó a dicho escrito, entre otros, dos anexos certificados.

Por auto de ocho de abril de dos mil veintiuno se admitió la reconvención.

Mediante escrito presentado el quince de abril de dos mil veintiuno, **** ***** ***** *****

***** ** ***** ***** ***** *****

***** , contestó la demanda instaurada en su contra y

y F/***** los que dijeron que también obraban en autos, con motivo de la acción principal intentada (Documentales VI y VII).

Mediante proveídos de uno y nueve de septiembre de dos mil veintiuno se tuvieron por contestadas las demandas reconventionales, respectivamente.

Por auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno, el juez de origen se pronunció respecto de las pruebas ofrecidas por las partes y, en lo que interesa, en relación con las “ofrecidas” por las demandadas señaló, lo siguiente:

“Demandadas. - - - 2) ** ***** ***** *******
******* ** ***** ***** como causahabiente de**
(sic) final y universal de “*** *****”,**
******* ***** ***** ** ***** *******
******* ***** - - - Las documentales señaladas**
con los numerales I a la V, que ofrecieron con el
escrito número de registro 01861⁵⁵ –en las
condiciones de originalidad, copia simple o
certificada que fueron exhibidas-. - - (...) - - - 4)
“*** ***** * *****”, la cual no**
presentó medios de convicción, por lo tanto, con
fundamento en el artículo 1078 del Código de
Comercio, se le tiene por perdido el derecho para
hacerlo con posterioridad.”

⁵⁵ Escrito de contestación de demanda y reconvencción presentado en el mes de marzo de dos mil veintiuno (día ilegible).

Precisadas las citadas actuaciones, cabe señalar que la fracción VIII, del artículo 1378 del Código de Comercio⁵⁷, establece que la demanda en juicio ordinario debe reunir, entre otros, el requisito de señalar el ofrecimiento de las pruebas que el actor pretenda rendir en el juicio.

Además, el artículo 1461 del Código de Comercio⁵⁸, impone que la parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá presentar el original del laudo debidamente autenticado o copia certificada del mismo y el original del acuerdo de arbitraje.

Ahora, en relación con la inconformidad de las promoventes, relacionada con la admisión de pruebas, es importante destacar que si bien es cierto, como se observa de la narración que antecede, las actoras reconvencionistas se abstuvieron de señalar en sus escritos respectivos el apartado conducente de ofrecimiento de pruebas, también se observa que acompañaron diversas documentales, siendo éstas las que se tuvieron por ofrecidas como prueba y admitidas en el proveído de veinte de octubre de dos mil veintiuno.

Considerando que se trata de los documentos que sus contrarias acompañaron a sus escritos iniciales, es

⁵⁷“Artículo 1378. La demanda deberá reunir los requisitos siguientes: - - - (...) - - - VIII. El ofrecimiento de las pruebas que el actor pretenda rendir en el juicio, y (...)” En el que se apoya la autoridad responsable.

⁵⁸ Citado con anterioridad.

correcto que se tuvieran como pruebas y específicamente, que fueran objeto de valoración

Es así, porque como determinó el juez federal, aun cuando no se hubieran ofrecido como prueba de manera destacada, es dable considerar que pudieran valorarse en términos de la interpretación dada a los artículos 1061, 1205 y 1378 del Código de Comercio, en el sentido de que el legislador distinguió claramente lo que son las pruebas o documentos base de la acción, o de la excepción, de aquellas que por cualquier otra circunstancia vengan al juicio, pues los documentos base de la acción o de la excepción y que se anexan a los escritos respectivos (inicial o de contestación de demanda), no requieren de admisión expresa del juzgador, dado que basta con que se anexen para que se tengan por exhibidos y se corra traslado con ellos a la contraria, para que se impongan de su contenido y, en su caso, puedan ofrecer diverso medio de prueba para desvirtuarlos o destruirlos, lo que no había acontecido en la especie.

Lo anterior también deriva de una interpretación armónica de las fracciones V y IX, del artículo 1378 del Código de Comercio⁵⁹, que imponen que en la demanda, el

⁵⁹ "Artículo 1378. La demanda deberá reunir los requisitos siguientes: - - - (...) - - - V. Los hechos en que el actor funde su petición en los cuales precisará los documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho, así como si los tiene a su disposición. De igual manera proporcionará los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos relativos. - - - Asimismo, debe numerar y narrar los hechos, exponiéndolos sucintamente con claridad y precisión; - - - (...) - - - IX. La firma del actor o de su representante legítimo. Si éstos no supieren o no pudieren firmar, pondrán su huella digital, firmando otra persona en su nombre y a su ruego, indicando estas circunstancias. - - - Respecto al requisito mencionado en la fracción V el actor

Básicamente, el hecho de que los documentos exhibidos en la demanda o contestación a la misma, según el caso, no se ofrezcan formalmente como pruebas, no impide que puedan ser tomados en cuenta por el juzgador, ya que la intención de las partes de acompañar determinado medio de convicción, no puede ser otra, sino la de que sea tomado en cuenta de acuerdo con sus pretensiones, por lo que la ausencia de formalidad en su ofrecimiento no es motivo para dejarlo de tomar en consideración.

deberá mencionar los documentos públicos y privados que tengan relación con dicha demanda, así como si los tiene o no a su disposición debiendo exhibir los que posea, y acreditar haber solicitado los que no tengan en los términos del artículo 1061. De igual manera, proporcionará los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos contenidos en la demanda, y las copias simples prevenidas en el artículo 1061. Admitida la demanda se emplazará al demandado para que produzca su contestación dentro del término de quince días.(...)”

intentadas, es decir, está relacionado con los hechos debatidos, de lo que deriva la ineficacia de la inconformidad examinada en relación con los documentos que se tuvieron como prueba en el auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno, y en lo relativo a que no se ofreció como prueba el laudo arbitral.

En relación con las diversas documentales que amparan el acuerdo que contiene el arbitraje, el juez federal destacó esencialmente que constaban en autos y que de los artículos 1241 y 1296 del Código de Comercio se advertía que los documentos privados provenientes de uno de los interesados presentados en juicio y que no son objetados por la contraparte, se tendrán por reconocidos expresamente, por lo que los documentos privados procedentes de uno de los interesados, en el caso, los referidos contratos para la adquisición de una unidad modular de perforación exhibidos por los quejosos en el juicio de origen por vía de prueba, hacen prueba plena en su contra, en todas sus partes, pues los documentos privados exhibidos por las partes en el procedimiento, deben apreciarse como un acto unitario; es decir, si contienen varios hechos vinculados entre sí, la percepción de ellos debe ser unificada, asociando tales actos para que sean percibidos en conjunto, como una unidad vinculada e indivisible que permita al juzgador el conocimiento de los hechos que se pretendan probar con

dichos documentos y darles el valor probatorio que les correspondía, lo que había acontecido en el acto reclamado.

Esta determinación es correcta.

De la narración de las actuaciones ocurridas en el juicio en relación con el aspecto en análisis, se advierte que las actoras principales y demandadas reconvenidas ofrecieron como prueba los contratos base del arbitraje, que contienen el acuerdo respectivo.

Teniendo en cuenta que dichas pruebas se incorporaron al procedimiento por las quejas, es correcto que de ellas pudiera prevalecerse su contraria, en este caso para demostrar su acción, pues si bien es cierto las fuentes de prueba pertenecen a las partes, sólo ellas saben de su existencia, son anteriores e independientes del proceso; sin embargo, al incorporarse a éste se constituyen en medios de prueba y cuando ello ocurre, **dejan de pertenecer a las partes, pues se prueba para el proceso** y, en virtud del principio de adquisición procesal, cualquiera de éstas, o incluso el juzgador, puede prevalecerse de ellas.

Sirve de apoyo a lo anterior lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de rubro y texto⁶⁰:

“FUENTES DE PRUEBA Y MEDIOS DE PRUEBA. SU

MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.b7
26/05/24 17:00:00

rubro y texto⁶²:

“PRUEBAS. A QUIENES BENEFICIAN LAS. Por virtud del principio de adquisición procesal, las pruebas no sólo benefician a la parte que las haya rendido, sino a todas las demás que pueden aprovecharse de ellas, en lo que les favorezca, ya que no es posible dividir la convicción del juzgador sobre la existencia o la no existencia de los hechos litigiosos.”

Sobre esa base, es correcta la determinación en la sentencia recurrida, en el sentido de que las terceras interesadas cumplieron con los requisitos establecidos en el artículo 1461 del Código de Comercio relativos a su obligación de exhibir el acuerdo arbitral, así como el laudo arbitral, con lo que se acredita que se reunieron los elementos que la ley establece como necesarios para pedir la solicitud de su reconocimiento y ejecución, de lo que deriva la ineficacia de esta inconformidad y de la relativa a que no fue considerada su objeción a los documentos respectivos.

Es importante precisar que lo relativo al ofrecimiento y a la valoración de pruebas se regula por la ley, por lo que en nada perjudica a la quejosa que se hubieran citado preceptos que no fueron analizados por la autoridad responsable (1241 y 1296 del Código de Comercio), de lo

⁶² Tesis visible en la página 56, Quinta Parte, Volumen LVII, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 274668.

Considerando que las violaciones que alude la recurrente en relación con el estudio de la acción reconvencional no se configuraron, es correcto que se desestimaran sus conceptos de violación encaminados a desvirtuar lo resuelto en relación con la acción reconvencional, más aún que tampoco la impugna por sí.

En relación con las fianzas

La inconforme aduce, básicamente, que contrariamente a lo establecido por el A quo, se vulnera el orden público con las pólizas de fianza expedidas a favor de ***** , pues cuando se originó el procedimiento de contratación por medio de subasta en octubre de dos mil catorce, era una entidad paraestatal todavía y no una empresa productiva del Estado, pues no había entrado en vigor la nueva Ley de Petróleos Mexicanos de dos mil catorce que transformaba a ***** y sus subsidiarias como empresas productivas del Estado, lo que sucedió hasta el veintiocho de abril de dos mil quince, mediante la reforma energética.

Que, entonces, los acuerdos arbitrales que dieron origen al laudo arbitral son de naturaleza administrativa, por

lo que no se podía conceder las pólizas de fianza en favor de ***** como empresa productiva del Estado, porque el dinero con el que se iniciaron los contratos *** devino del erario público.

Lo anterior es ineficaz, porque esta impugnación está encaminada a combatir la legalidad de un acto que no es el objeto de la litis en el juicio de origen ni de los que debe partirse para verificar las causas de nulidad que hace valer, pues lo que debe considerarse es el laudo arbitral o los acuerdos arbitrales, que no están previstos en las fianzas respectivas, de lo que deriva la ineficacia de la inconformidad examinada.

Violaciones formales.

De la lectura integral de los agravios de la recurrente se advierte que alude a la omisión de estudio de diversos conceptos de violación y también destaca incongruencias en las que dice incurrió el juez federal al analizar sus conceptos de violación, pues a manera de ejemplo destaca que la citada autoridad señala que se le ocasiona un perjuicio porque en la sentencia recurrida se hubiera señalado que los contratos base de la arbitraje se suscribieron con ***** , cuando que éste no participó en dichos actos, lo que constituye una incongruencia en la sentencia.

También refiere que no se advirtió la omisión de análisis en el juicio de origen respecto de sus excepciones ni

sus alegatos.

Los argumentos sintetizados son ineficaces, para lo que se tiene en cuenta el problema jurídico a resolver a través del presente recurso, consistente en determinar si fue correcto o no que se desestimaran los conceptos de violación de la quejosa (en general), en contraste con lo resuelto en el acto reclamado, consistente en la sentencia dictada en el juicio de origen, que resolvió respecto de las acciones intentadas por las partes, de determinar si procedía o no la nulidad o el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral, respectivamente.

En la especie, como se observa de la presente ejecutoria, se analizó si fue correcto o no que se desestimaran los conceptos de violación de la quejosa a la luz de la inconformidad que hizo valer, que básicamente se centró en que se determinara que se había actualizado la nulidad del laudo arbitral por las causas de nulidad que refirió y que la acción reconvencional de reconocimiento y ejecución de laudo arbitral era improcedente, por omisiones de su contraria y no por cuestiones de “fondo”.

Como se destacó en su oportunidad, fue correcto que se determinara que a la luz de la inconformidad de la quejosa no se actualizó la nulidad del laudo arbitral, pues en su impugnación parte de una premisa incorrecta, por lo que en nada perjudicaba que en su caso no hubiera sido

analizada por las autoridades responsables y de amparo, respectivamente a la luz integral de su impugnación y en relación con la acción reconvencional, su inconformidad resultaba insuficiente para que se declarara improcedente, por falta de exhibición de documentos a cargo de su contraria, dado que éstos constituían constancia de autos.

En tal contexto, considerando que en el caso se atendió el problema jurídico planteado a la luz de los agravios de la recurrente que no le resultaron favorables y que están apoyados en la defensa que ha hecho valer desde el juicio de origen, es que en nada perjudica que la sentencia recurrida se hubiera incurrido en las violaciones que se le atribuyen y que quedaron relacionadas en este apartado, porque a nada práctico conduciría su reparación pues no le resultaría favorable.

Básicamente, ningún beneficio le reportaría a la recurrente que se subsanaran las violaciones señaladas, atento a lo resuelto en cuanto a lo que realmente pretende la recurrente, consistente en que se considere procedente su acción de nulidad y la improcedencia de la acción reconvencional, que fue precisamente lo analizado a la luz de su inconformidad que resultó infundada.

Decisión

En las narradas condiciones, ante la ineficacia de los agravios de las recurrentes es procedente **confirmar** la

Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88, 93 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se,

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Magistrados integrantes del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, **ETHEL LIZETTE DEL CARMEN RODRÍGUEZ ARCOVEDO** (presidenta), **J. JESÚS PÉREZ GRIMALDI** (ponente), y **EDITH E. ALARCÓN MEIXUEIRO**, quienes firman

En diecinueve de junio de dos mil veintitrés, el Secretario de Acuerdos HACE CONSTAR, que en esta fecha se recibió en la secretaría el presente expediente por parte de la ponencia. Conste.

En términos de lo previsto en los artículos 1, 3, 9, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

*PAJ/*rjvcr.*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
55018414_4011000031276419014.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 4

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.b7	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	19/06/23 17:21:18 - 19/06/23 11:21:18	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	01 4a 6e b2 2f 36 e7 f3 08 3f 7d 99 d6 6b 51 ab cc 9c 95 b3 c2 6c 61 17 af 55 c1 ad a8 8b 67 53 e7 05 48 f6 c7 4d dc 51 d7 3a 70 c9 45 7d 70 34 d4 49 92 86 73 14 d7 13 54 5f dc f5 71 ed ea 0e 2b d1 38 02 0a 86 db 83 61 6a 5e 15 44 ba 15 2f 30 0c 0d b4 f6 4b 81 fe ad 38 02 3c ba 22 64 bc 85 ce 1e 28 70 74 45 ae b6 35 eb 57 cb dd 5c a9 77 cd 38 d5 7e f1 e8 12 96 89 90 cd 7b 25 64 dc 92 3b d1 56 e5 6a e7 7b da ac 60 d5 28 0b 26 3a bb cf ff b6 fa 15 36 d1 0f 05 bc 2c 2d a1 06 d3 5d 05 c0 44 66 ba e5 69 94 b5 4e a5 f2 5e 76 b8 83 bc 03 8e 4a e9 02 5a 69 ec 95 42 a2 6d 89 9f 34 39 e8 89 be 18 63 39 59 24 58 b8 c4 74 f9 a7 24 ad 98 e5 73 30 b7 2b 13 95 5d 09 30 4d 42 fe 62 b6 a8 e2 03 23 4f 49 46 2a 99 64 5b 2e 20 ae a0 4f ad 98 e4 01 8d d1 65 70 75 a7 ce 47 79 f4			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	19/06/23 17:21:18 - 19/06/23 11:21:18			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	19/06/23 17:21:19 - 19/06/23 11:21:19			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	11149470			
Datos estampillados:	todQeiUx0xJwDxlagH2WmSso9Is=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	J JESUS PEREZ GRIMALDI	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.02.27.f5	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	19/06/23 17:43:34 - 19/06/23 11:43:34	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	3a 1c fb f8 9e 51 06 4a a1 0d 7f c8 26 3a 51 3a be a6 01 38 eb 57 04 63 58 c6 ad 6e 8c 0c 6e 1c e4 4e 10 9a bd 55 ac 91 12 8b af 6f 25 39 91 fb 6b 74 f5 e0 60 40 e1 ab d5 23 ce 90 32 77 29 49 bc a0 a2 10 dd 42 04 21 e4 c8 27 b0 e1 0a 86 05 74 77 0f 7c 35 7f 60 c1 e1 fa e2 fd a0 1d fb 41 7d 80 7b 6c 23 df ee ac 34 15 ab 9c ee 20 c1 f7 e1 40 1f 1b cd 1c cb 22 40 17 64 16 59 fa c9 4b d0 35 86 76 bd ce 05 8d 39 ed 70 49 f7 7c e5 3d 76 bf 62 38 64 bc 3e c4 41 ce 64 77 71 42 21 c3 9d 03 f4 e5 33 4b 2f 92 d5 95 55 9e b8 26 bf d6 f4 8c 25 7d e1 29 44 59 ca 5a 57 32 49 57 be 27 09 f0 d1 7b ad 10 98 32 a7 b3 e3 4e a9 f3 3f b0 eb 0b 0b 7f c3 80 1f 9d e5 8b 28 bf a4 ec 13 f7 93 66 de 29 b2 79 b7 69 a9 c9 0f 00 cd d9 0a 7d 0e 7e 17 03 da 8b 19 6d ad 69 14 25 54 4a 90			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	19/06/23 17:43:34 - 19/06/23 11:43:34			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	19/06/23 17:43:35 - 19/06/23 11:43:35			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	11167660			
Datos estampillados:	zSuPWRHGvDs016Uz0xANitCEXFg=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	EDITH ENCARNACION ALARCON MEIXUEIRO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.06.f4	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	19/06/23 17:55:42 - 19/06/23 11:55:42	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	5c 95 be f9 86 da 7d 5f a5 cd e0 59 bd 5b 54 4d 37 f3 c2 1e f7 ef 8b 13 e8 d7 5f e1 12 35 b0 b4 29 5d 5e d3 ed 4e b5 3a c4 ac 7f 02 a7 7f ca ae 30 a5 a0 c6 46 85 e7 af 29 05 41 4d 43 67 57 e2 eb 9b 1b e9 1b ac f2 54 9a bd 75 35 15 4b 27 80 ce 62 d1 8d 57 4e 94 ac e0 7b fd 93 cd 9b 8d 23 9b 43 0c 9c 91 d8 54 94 b3 81 78 36 05 04 b4 67 4d 54 d8 20 33 bc 6c 24 78 33 72 4a be 82 d5 9f 63 18 7c 41 11 3a db d2 a8 ab 7e e9 ed 44 a9 27 2b 19 8b fc 12 c3 f7 82 9f bc 23 07 b1 97 3d 9a 8b a2 25 d8 35 49 19 ec c4 70 72 07 0f b8 34 d1 1b 5a c9 d6 29 6d a1 27 cb 0b 80 91 bc 16 61 7a 22 25 98 78 8e f0 3d 43 9a cb 82 7a 60 b0 f8 f2 2e 7f 65 1b b3 26 19 f0 87 66 ea 78 0f be ae f7 bd 8c e5 bd 42 e6 e1 7b d8 22 2e 66 6c 67 e2 8b f9 35 e0 0c af 55 66 de 32 73 6d 89 03 e8 59 7b			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	19/06/23 17:55:43 - 19/06/23 11:55:43			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.32.20.63.6a.66.6f.63.73.70			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	19/06/23 17:55:43 - 19/06/23 11:55:43			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	11178042			
Datos estampillados:	ffqarphBAU/koCwnkpQagYFJ3TY=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	Ethel Lizette del Carmen Rodríguez Arcovedo	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.02.35	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	19/06/23 17:58:21 - 19/06/23 11:58:21	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	64 d9 c3 ea d6 90 97 b3 af 19 52 a4 36 96 bb 2b 7d 1e b2 97 c4 0e d2 69 c3 48 ac a9 a2 4a a7 bf ca 8a 60 1d 3e 8c 4e ab 08 21 25 12 e8 f1 7b 98 f8 f4 89 4e b6 43 a1 6f 9f b5 88 8f bd b3 6b dd 44 cf 0e 5a b6 65 fc e5 b1 fa d6 8d 98 0f 28 6e e7 64 9d 36 f8 f8 1b c5 b1 02 86 d0 81 a6 9e 25 dc 71 30 55 10 58 56 cc 35 ca 29 9d e9 39 8d 92 b4 25 e5 e6 88 9f c7 96 6d c7 dc 6b fd 05 65 74 e7 37 ad 04 3d 38 2d 55 55 39 f5 53 57 29 b1 b1 0d 9d 11 75 36 ed 7b df b0 fb 37 be da 13 04 3d 2b f1 38 50 17 43 ad 37 01 40 3e 5e cb ff db fa 73 24 28 ba b2 d9 b5 46 e5 bf a9 6d 7a ab 9c d1 ba 95 30 85 39 c1 0b 5a 10 9e 2f 93 e7 d9 6f b7 86 62 e1 89 81 33 d8 a5 8b 91 a9 0e 98 7d a5 90 be 7d 55 f5 ae df 18 9f f6 80 46 4c b9 a2 3e a0 b1 ca d8 cb 8a ff 50 7d 41 38 9b fa 94 f2 bf 89			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	19/06/23 17:58:22 - 19/06/23 11:58:22			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	19/06/23 17:58:22 - 19/06/23 11:58:22			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	11180347			
Datos estampillados:	emsFfzVH/DttmpUsn09NCGXSboc=			

El diecinueve de junio de dos mil veintitres, el licenciado Marco Antonio Rivera Gracida, Secretario(a), con adscripción en el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, hago constar y certifico que en esta versión pública no existe información clasificada como confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Conste.